



## NEGA (No es un gran avance)

Por Manuel Riesco - CENDA

En respuesta a una de las mayores movilizaciones educacionales que se tenga memoria, el Presidente y su Ministro han anunciado con fanfarria y por su cuenta un Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE). Lamentablemente, su propuesta no es un gran avance (NEGA). Nuevamente, [como fue el caso del "Royalty" minero](#), teniendo la solución a la mano y el apoyo de todo el país para hacerlo, el gobierno no parece dar el ancho para resolver un grave problema nacional que se arrastra por décadas: [La proporción de estudiantes matriculados sobre la población total ha bajado de 30 por ciento hace cuarenta años a 26 por ciento hoy](#); con la diferencia que ahora las familias pagan, por una educación cuya calidad deja muchísimo que desear, la mitad de la cuenta total, el 85 por ciento en las universidades y el 100 por ciento en la educación técnica.

La causa principal de la crisis del sistema educacional es un esquema que se arrastra desde 1980, [cuyo objetivo principal consiste en privatizar la educación más que lisa y llanamente en mejorarla](#). Peor aún, para evitar la "competencia desleal," promueve implícitamente el desmantelamiento del sistema de educación pública, cuyo engrandecimiento siempre debió ser siempre su misión. En la propuesta gubernamental ello ni siquiera se menciona y en lo sustancial no se toca. Aparte de medidas como crear una Subsecretaría y una Superintendencia, que si bien son avances no resuelven el problema. Peor aún, el Presidente y su Ministro pretendieron abrir un debate ¡para legalizar el lucro que en los hechos profitan varias universidades privadas, una de las cuales pertenece al parecer al Ministro, según investiga la Contraloría!

Ni siquiera aparecen dispuestos a revertir la nefasta municipalización de colegios y liceos estatales. Tampoco, a terminar con el subsidio fiscal a "sostenedores" que lucran en educación básica y media. En lugar de eso, el Presidente ha propuesto ahora "un amplio menú de posibilidades," para administrar los colegios y liceos con financiamiento público. A estas alturas, luego de tres décadas de intentos fracasados en la materia, sus propuestas al respecto parecen payasadas, dicho francamente. Siguen sordos al clamor unánime de la comunidad escolar, los propios alcaldes, expertos educacionales nacionales e [internacionales](#), parlamentarios y del país entero, que demandan el restablecimiento de un sistema nacional de educación pública moderno, centralizado y descentralizado al mismo tiempo, como cualquier organización racionalmente concebida. Rapidamente, debe habilitar un colegio público gratuito y de excelencia, en cada barrio de cada ciudad y pueblo de Chile. Si el país lo logró en el siglo 20 bien puede hacerlo de nuevo en el siglo 21. Si de verdad quieren un acuerdo, bien pueden considerar algunos pasos claros y concretos en esta dirección, en beneficio de todos.

Otra causa de la crisis es el insuficiente gasto público en educación, que nunca se ha recuperado de su recorte a la mitad por la dictadura de Pinochet. En los hechos, tras haber alcanzado cerca de 7 por ciento del PIB a principios de los años 1970, hoy

continúa en [poco más de 4,4 por ciento del PIB](#). En el caso de la educación terciaria la situación es peor: Ha bajado de 0.9 por ciento del PIB hace cuatro décadas a 0,4 por ciento del PIB en la actualidad; con el agravante que ese nivel educacional concentra hoy una mayor proporción del alumnado.

El gobierno ha propuesto crear un fondo de 4.000 millones de dólares para educación, una cifra "soñada" según el Ministro, que ha dicho utilizará para financiar ayudas estudiantiles y el incremento de la subvención escolar hasta el 2018. El gobierno debe precisar de qué manera piensa girar este fondo y a lo largo de cuánto tiempo. ¿Porqué lo denominan "fondo," si lo que se necesita es incrementar considerablemente el presupuesto educacional anual? ¿Es que están pensando en una suerte de fondo fiduciario como el que tienen las universidades donde ambos estudiaron en los EE.UU.? Con la diferencia que la sola Universidad de Harvard, donde estudió el Presidente, tiene un fondo de ¡más de treinta mil millones de dólares! Si así fuera, el país debe tener claro que el famoso fondo no se va a tocar y solo se van a girar anualmente sus ganancias, que a lo más serán un par de cientos de millones de dólares por año, si es que la crisis mundial no sufre una recaída. Esa cifra representaría no un cuarenta por ciento del gasto anual en educación, como dijo el Ministro, sino del orden de un 2 por ciento del mismo, lo que no resuelve nada.

Mucho más razonable a este respecto parece la propuesta efectuada por el Presidente del Senado al Presidente de la República: incrementar el gasto en educación en una cifra anual equivalente al 1 por ciento del PIB, que él estimó en el orden de 2.500 millones de dólares adicionales por año. Eso representa un 25 por ciento de incremento del gasto público en educación y aunque todavía queda lejos de alcanzar lo que se le destinaba hace cuarenta años, se acerca más a lo requerido.

La mayor parte del financiamiento adicional debe ir a la educación superior, que fue la más castigada después del golpe de 1973 y hasta hoy ha sido la pariente pobre en la recuperación del gasto público en educación a partir de 1990. El costo total de la educación superior, [según los ingresos consignados en los balances de todas las instituciones](#), alcanzó el 2009 a 2,4 billones de pesos (unos cinco mil millones de dólares), de los cuales el Estado aportó 0,4 billones de pesos (unos 800 millones de dólares), [según la Dirección de Presupuestos \(DIPRES\)](#). Es decir, el aporte fiscal al costo total de la educación superior, universitaria y técnica, pública y privada, alcanza apenas al 17 por ciento del costo total de la misma. Debe ser incrementado rápidamente y en forma considerable, al menos al doble o triple como propuso el [informe al respecto de la OCDE](#).

Adicionalmente, como consta en el mismo [informe](#), la mayor parte del incremento debe destinarse a aportes basales a las universidades y especialmente a las estatales, de modo que éstas puedan consolidar una base adecuada y estable para la investigación y la extensión, que junto a la docencia forman parte esencial de su quehacer. Uno de los mayores problemas del esquema de financiamiento actual es que asume que debe provenir principalmente de los alumnos, lo cual aparte de representar un costo insostenible para las familias, [degrada las pocas universidades que merecen el nombre de tales y estimula que todas se conviertan en simples instructoras de docencia](#). En acuerdo con lo anterior, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, CRUCH, al cual pertenecen todas las universidades estatales y particulares tradicionales, entre ellas las cinco "[universidades de investigación](#)," que concentran un quinto del alumnado

total, un 40 por ciento de los académicos a jornada completa, la casi totalidad de las publicaciones científicas y el 40 por ciento del presupuesto total de las universidades, ha venido insistiendo en la necesidad que el Estado les aporte al menos un 50 por ciento de su presupuesto en la forma de aporte fiscal directo, que hoy representa menos de un 10 por ciento del mismo.

Por su parte, los estudiantes han insistido que dicho mayor aporte basal debe hacerse extensivo a todas las universidades que efectivamente acrediten realizar investigación y extensión además de docencia, garanticen la libertad de cátedra, promuevan el acceso a alumnos de sectores populares y adopten formas de cogobierno democrático. Es decir, lo mismo que logró la Reforma Universitaria de los años 1960, que en cinco años duplicó la matrícula y transformó instituciones anacrónicas en universidades modernas, mediante la inyección de recursos públicos a las que cumplieren estos requisitos. Un acuerdo de verdad requiere avanzar asimismo en esta dirección.

Los estudiantes reclaman con toda razón reducir significativamente la carga financiera insoportable que hoy recae sobre ellos y sus familias y que ha adquirido connotaciones de [escándalo con el llamado Crédito con Aval del Estado \(CAE\)](#). Según [resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la CONFECH](#), el aporte de las familias al financiamiento de la educación superior alcanzó el 2009 a casi 1,5 billones de pesos. Esta cifra representa cerca de un 40 por ciento del total de impuestos a la renta pagados por todas las empresas y personas pudientes ese mismo año, [según el Servicio de Impuestos Internos \(SII\)](#).

Ello es injusto e insostenible. ¡Basta con imaginar el escándalo que se generaría en estos últimos sectores si de un día para otro les subieran la carga impositiva en un 40 por ciento! Pues bien, eso es precisamente lo que reclaman hoy los estudiantes en las calles, porque es lo que actualmente están pagando ellos y sus familias. Lo anterior se agrava con el llamado [CAE](#), puesto que al costo de los aranceles, matrículas, multas y gabelas que cobran las universidades, hay que agregar intereses acumulados de más de seis por ciento al año a lo largo del período de estudios, a favor de los bancos. El resultado es una suerte de impuesto brutal a la planilla de salarios, que un [reciente estudio del Banco Mundial al respecto](#) estimó en el caso de un veterinario, por ejemplo, va a llegar a un tercio de sus ingresos como profesional. Eso no es todo, puesto que el CAE ha resultado en un desembolso fiscal equivalente a su aporte a la educación terciaria, cuyo beneficiario principal ¡han sido los bancos!. [CENDA ha actualizado por estos días con las cifras del 2011 el informe de DIPRES al respecto](#), constatando que el [desembolso fiscal por concepto de CAE entre 2006 y 2011](#) ha alcanzado un total de 538.337 millones de pesos (más de mil millones de dólares), que equivalen al 51 por ciento del poco más de un billón de pesos en CAE cursados y renovados. Esta cifra incluyen una recompra de CAE a los bancos por 432.080 millones de pesos, equivalentes al 41 por ciento de los CAE cursados y renovados. Por otra parte, el desembolso fiscal por CAE incluye el pago a los bancos de un recargo sobre los CAE recomprados que suma la friolera de 106.257 millones de pesos (unos doscientos millones de dólares). El escándalo es mayor si se considera que entre el 2006 y 2010 los recargos promediaron casi un 40 por ciento de los CAE recomprados, sin embargo el 2011, dicho porcentaje se redujo ¡al seis por ciento! En otras palabras, los arrogantes tecnócratas de Hacienda que diseñaron este mecanismo y estuvieron a cargo de esta gestión, la que fue visada cada año por los Ministros de Hacienda y Educación, estuvieron pagando

decenas de miles de millones de pesos de más cada año a los bancos, desembolsando una cifra total equivalente al gasto fiscal en educación el año 2010. En otras palabras, los únicos que ganaron con el CAE fueron los bancos, que prestaron a los estudiantes a un seis por ciento de interés anual, con aval del Estado y de las instituciones educacionales, con derecho de embargo sobre futuros sueldos y devoluciones de impuestos, fondos que en buena parte fueron aportados por el fisco, el que además les pagó doscientos millones de dólares por este "servicio." ¡Una verdadera lindura!

La propuesta del gobierno a este respecto consiste en lo siguiente: dar becas a los estudiantes de los cuatro primeros deciles de ingresos que obtengan más de 550 puntos en la PSU - los que lamentablemente son muy pocos, del orden de [veinte mil](#) según el DEMRE - y reducir el interés de los CAE ya otorgados de 6 por ciento a 4 por ciento. Adicionalmente, propone una comisión de expertos para reformular el CAE. Es un avance, pero resulta del todo e innecesariamente insuficiente. De partida, reducir el interés de los endeudados por CAE de 6 a 4 por ciento no alivia su situación ¡casi nada! El problema, como se ha visto, es que los montos de las deudas resultan impagables ¡aún a interés cero! Felizmente, el Estado tiene la solución en la mano: ya ha recomprado a la banca el 41 por ciento de los CAE cursados hasta el 2011 inclusive, es decir, el dinero ya lo desembolsó. ¡Basta condonar esa parte de la deuda y ya! Ello no significa un peso adicional de desembolso sino sencillamente reconocer que los CAE recomprados en su poder constituyen una acreencia que no vale nada porque son impagables. ¡Si no es así, que intente venderlos, "securitizados" como querían los ágiles de Hacienda que inventaron este engendro digno de La Polar, a ver cuanto le ofrecen por ellos!

Desde luego hay que terminar con el CAE, que es un escándalo en el que solo ganan los bancos sí o sí. Sin embargo, se puede reemplazar por becas muchísimo más amplias y generosas, por ejemplo, atender la demanda estudiantil de becas para los seis primeros quintiles, sin exigencia mayor de puntaje que haber ingresado a una universidad acreditada de verdad.

Mal que mal, los desembolsos que ya viene haciendo el Estado por CAE son muy cuantiosos. El 2011, por ejemplo, los desembolsos fiscales por CAE fueron de equivalen al 48 por ciento de [los CAE otorgados y renovados, que este año fueron casi 300 mil](#). Es decir, desembolsando lo mismo se pueden otorgar 150.00 a adicionales a las que ya entrega el Estado y cubrir con ellas a la mitad de los estudiantes a los que actualmente se les cursan CAE.

Con un desembolso adicional de 200.000 millones de pesos, se puede atender con becas a todos los que el 2011 recibieron CAE. Un avance sustancial en esta dirección ciertamente sería bien recibido por el estudiantado movilizado. Finalmente, el gobierno ha ofrecido ampliar las becas a estudiantes de educación técnica de 70.000 a 120.000 y su monto de 500 mil a 800 mil pesos. Nuevamente, el gobierno se queda corto, especialmente si se considera que el Ministro intentó descalificar el movimiento estudiantil declarándose defensor de los estudiantes de Institutos profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). Y ahora les ofrece esto, que en plata suma 61.000 millones de pesos, como cualquiera puede comprobar con un par de multiplicaciones y una resta. No parece mucho comparado con lo que mismo

Ministro le desembolsó a los bancos por el CAE el 2010 y 2011, que sumó poco menos de [¡400 mil millones de pesos!](#)

En la educación superior técnica hay que ponerse serios, porque es efectivamente el pariente más pobre de la educación chilena y aquel donde se pueden obtener los resultados inmediatos más contundentes. [Como se muestra en otra nota](#), si se extiende a todo Chile el ejemplo del CFT de Lota, el único público y gratuito del país y que depende de CORFO, se puede aumentar al doble la cobertura educacional de educación superior aumentando sólo un 7 por ciento el gasto en educación, aparte de invertir en instalaciones por una sola vez el equivalente al bendito Fondo GANE del Ministro y su Presidente.

Siendo Alcalde de Santiago, el actual Ministro de Educación tuvo la peregrina ocurrencia de hacer una playa de mentira al lado del Mapocho en lugar de llevar a los niños de su comuna a veranear a la playa de verdad. Ahora tiene ocasión de dar a los estudiantes, a la comunidad escolar y académica y al país entero una solución de verdad. ¡Ojalá lo haga y gane de verdad!

## **Observatorio Chileno de Políticas Educativas – OPECH**

[www.opech.cl](http://www.opech.cl)

[\*\*opech@uchile.cl\*\*](mailto:opech@uchile.cl)